

Violencias

La militarización del combate a las drogas no agrega eficacia a esa tarea y sí en cambio lesiona el prestigio de las fuerzas armadas. Y las deja en ridículo cuando quedan chasqueadas, cuando asustan con su inesperada y estruendosa presencia a la población y se retiran con las manos vacías. O casi.

DE HABERSE PRODUCIDO LA VÍSPERA, Y NO en el día mismo en que se expidieron los certificados de buena conducta a quienes combaten el negocio de las drogas, quizá las operaciones militares contra los hermanos Arellano Félix hubieran provocado que el gobierno de México padeciera la suerte que el de Colombia, la temible descertificación. Porque esas acciones sintetizaron lo que en buena medida ha sido la lucha gubernamental contra el narcotráfico: más espectáculo que eficacia, más despliegue aparatoso que resultados.

Mucho ruido y pocas nueces, pues. Como en una mala caricatura, tanto en Tijuana como en la ciudad de México se desplegaron efectivos para una batalla en toda forma, que se resolvió en nada, porque los miembros de la célebre familia de narcotraficantes, herederos del coto de poder de su primo Miguel Ángel Félix Gallardo, no estaban en los domicilios cateados -junos veinte en la ciudad fronteriza y por lo menos tres en la capital federal-, ya sea porque nunca han estado allí o porque recibieron oportuno aviso. En la casa de la colonia Prado Coapa del Distrito Federal donde se concentró la principal presencia militar, en efecto, las tres personas que habitaron durante unos meses la residencia cateada se mudaron precisamente la víspera de que la fuerza pública llegara a buscarlos.

La Constitución prohíbe a los militares realizar, en tiempos de paz, ninguna función que no tenga que ver con la disciplina castrense. Pero pasando por alto el estricto mandamiento constitucional, el gobierno mexicano ha encomendado al Ejército tareas policiacas.

Con diversas modalidades, las fuerzas armadas federales han sido involucradas en la lucha contra las drogas, a veces y en regiones entrando directamente a la persecución de bandas delincuenciales, a veces sólo en labores de vigilancia de vías de comunicación susceptibles de ser utilizadas por el narcotráfico, a veces en la destrucción de plantíos de mariguana y amapola y la quema de estupefacientes decomisados. No ha sido sano el saldo de esa participación militar en funciones policiacas, como lo muestra el que haya varios miembros de esa corporación sujetos a juicio o ya sentenciados por ilegales intervenciones en esa materia, y de que en procesos judiciales norteamericanos se haya llegado a incluir a un secretario de la Defensa Nacional, el general Juan Arévalo Gardoqui, como parte de ese ruín negocio.

La militarización del combate a las drogas no agrega eficacia a esa tarea y sí en cambio lesiona el prestigio de las fuerzas armadas. Y las deja en ridículo cuando quedan chasqueadas, cuando asustan con su inesperada y estruendosa presencia a la población y se retiran con las manos vacías. O casi.

Aunque en ningún momento deja de ser ilegal, las autoridades civiles explican su llamado de auxilio al Ejército por la peligrosidad de las operaciones en que se incorpora a militares. De aplicarse tal criterio en general, hubiéramos visto un despliegue castrense semejante al de anteayer a la hora de capturar a Juan García Abrego, un jefe de mafia tan peligroso como los Arellano Félix. En el municipio de Juárez, Nuevo León, veinte agentes del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, lo detuvieron el domingo 14 de enero pasado. Más todavía, cuando el 4 de diciembre de 1993 fue detenido en Mazatlán Francisco Arellano Félix, el mayor de la familia, la aprehensión corrió a cargo de sólo diez agentes.

Esa detención, por cierto, se realizó después de un largo periodo en que dejaron de aplicarse órdenes de aprehensión contra el primogénito de Benjamín Arellano y Alicia Félix, cuyos otros tres hijos (Benjamín, Javier y Ramón) eran el blanco de las operaciones del viernes pasado, pues son cabezas del cártel de Tijuana. Lo son hace mucho tiempo, especialmente después del retiro forzoso de Félix Gallardo (preso desde 1989, y ahora uno de los reclusos principales en Almoloya). Puestos en el centro de la atención pública desde que en mayo de 1993 su banda participó en la balacera del aeropuerto de Guadalajara, donde fue asesinado el cardenal Posadas, son tan conocidas sus andanzas, tan públicas sus relaciones, tan patente su impunidad, y tantas veces han fracasado batidas en su contra, análogas a las lanzadas anteayer, que esa sólo puede ser vista como algo ajeno a ellos mismos, como emprendida con otro propósito. Y es que, de existir realmente la intención de capturarlos, se habría aprovechado hace tiempo la estela que deja su conexión vaticana. Dos de los tres hermanos Arellano Félix que están todavía prófugos visitaron en la delegación apostólica, por dos veces, al nuncio de la Santa Sede, Gerónimo Prigione, y de su presencia en ese recinto diplomático estuvieron ente-

rados el presidente Salinas y sus dos colaboradores más interesados en el tema, el secretario de Gobernación y el procurador de la República. Y ni entonces ni ahora ha pasado nada.

La muy vistosa presencia militar en operativos infructuosos está seguramente relacionada con la certificación norteamericana, no tanto para su obtención porque estaba ya acordada, sino para ofrecer un testimonio público de cuán acertada fue la decisión de la Casa Blanca. Frente a ese procedimiento estadounidense, el gobierno de México adoptó una doble estrategia, una para cada una de las posibilidades. Frente a la eventual reprobación del combate mexicano a las drogas, el terreno había quedado preparado con un ruidoso des-

Dos de los tres hermanos Arellano Félix que están todavía prófugos visitaron en la delegación apostólica, por dos veces, al nuncio de la Santa Sede, Gerónimo Prigione, y de su presencia en ese recinto diplomático estuvo enterado el presidente Salinas.

garramiento de vestiduras, que reprochaba a Estados Unidos el ejercicio de una facultad ciertamente injerencista y entrometida, pero que ha sido permanentemente aceptada por las autoridades de México. Pero, al mismo tiempo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República se hicieron presentes ante el Departamento de Estado para asegurarse de que Washington daría el visto bueno ansiosamente necesitado para fortalecer a un gobierno que todavía no fija rumbos a cuál dirigirse.

La decisión de la Casa Blanca es una muestra de la fragilidad de países como Colombia y México (y Cuba, en otro sentido y por otras circunstancias), donde la palabra del poder norteamericano es capaz de alterar los procesos internos tanto o más que la acción de las fuerzas políticas nacionales. La reprobación al gobierno de Ernesto Samper probablemente precipitará un desenlace en la crítica situación que ahora vive esa república. Si tiene que renunciar el Ejecutivo, su caída se producirá no por el juicio que a través de las instituciones colombianas está en curso, ni por las presiones ciudadanas, sino porque el Departamento de Estado expidió ya la condena respectiva.

Visto desde otro mirador, sacar a la calle a fuerzas militares en la ciudad de México fue un pecado de inoportunidad. La capital vive horas de intranquilidad permanente, de crispamiento por la vio-

El informe del fiscal especial para determinar la verdad en la matanza de Aguas Blancas hubiera sido escandaloso por exonerar, sin fundamento, al gobernador Figueroa. Pero lo ha sido en grado mayor porque choca con evidencias públicas sobre la gestación del conflicto.

lencia callejera, que reviste mil formas. Ejemplifican ese estado de ánimo los graves desmanes habidos en la colonia Santo Tomás el jueves pasado. No han sido infrecuentes los actos de vandalismo perpetrados por grupos juveniles que, siendo o no alumnos de escuelas de enseñanza media o superior, se acogen a un cierto fuero que por décadas protegió a los estudiantes, ya privilegiados por no tener que entrar tempranamente al mercado de trabajo como la mayor parte de los muchachos de su edad. Pero el del último día de febrero se cometió a partir de una torpe e instintiva ansia de venganza, luego de que dos jovencitas fueron atropelladas y muertas por un autobús del servicio público. Condiscípulos de las víctimas se aglomeraron para demandar justicia y de su reunión brotó la violencia desorganizada y lesiva para el vecindario. Fue una erupción, en modo alguno

justificable, pero que probablemente indica los altos grados de explosividad en que se halla la ciudad.

Y no sólo el Distrito Federal: en Palenque, Chiapas, un incidente menor en el estadio de beisbol, causado por la sobreactuación policiaca, se complicó y dio lugar a un estallido de cólera, semejante al de los muchachos de Santo Tomás, en que fluyeron inquinas viejas contra la autoridad, manifestadas apenas hubo ocasión de que surgieran. Conflictos añejos mal resueltos no desaparecen, quedan larvados y se transforman en asaltos, no al poder porque todo quedó en agresividad espontánea, sino contra los símbolos de ese poder, como el palacio municipal que fue parcialmente incendiado.

La prepotencia policiaca, grave de suyo, es mucho más indignante y riesgosa cuando es solapada por las autoridades, y todavía más cuando es utilizada por tales autoridades como instrumento de gobierno, en reemplazo de la política. Eso ocurre de modo particular en Guerrero, donde también la procuración de justicia se utiliza para ocultar la verdadera naturaleza del litigio social, que consiste en la pugna entre personas cada vez más concientes de sus derechos y unas autoridades, el gobernador Rubén Figueroa particularmente, habitantes del arcaísmo virreinal que confunde a los ciudadanos con súbditos nacidos para callar y obedecer.

La presentación del informe del fiscal especial para determinar la verdad en la matanza de Aguas Blancas hubiera sido escandalosa por exonerar, sin fundamento, al gobernador Figueroa. Pero lo ha sido en grado mayor porque choca de frente con evidencias públicas sobre la gestación del conflicto a que se refiere su documento.

Durante mes y medio, el Ejecutivo guerrerense se solidarizó plenamente con la acción de sus subalternos, que en un camino rural asesinaron a 17 campesinos.

Figueroa se convirtió en aval y difusor de un video que buscaba probar la tesis oficial de un enfrentamiento a tiros. Cuando intervino en el caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quedó en claro que el documento audiovisual había sido trampeado, para hacerlo decir lo que los hechos no dijeron el 28 de junio del año pasado.

Pero la CNDH llegó a esa conclusión a partir de la pura observación técnica del video, así como de su comparación con testimonios y pruebas periciales. Pero no se había conocido el documento original, de donde se editó el presentado por Figueroa en su campaña propagandística autoexculpatoria, hasta que el domingo pasado fue difundido por Ricardo Rocha en su nuevo programa "Detrás de la noticia", del canal dos de Televisa.

Reportero de ese consorcio desde hace más de veinte años, Ricardo Rocha ha podido recorrer un trayecto en que ha tenido que librar escollos surgidos del modo de ser de la empresa en que trabaja, y a la que prestigia. Su inteligencia y capacidad de trabajo le han permitido, además de percibir necesidades de entretenimiento e información distintas de las usuales en Televisa, recibir de ese consorcio ocasiones para poner en práctica sus concepciones sobre la televisión. De ese modo, ha creado emisiones que, sin perder la marca de la casa, ostentan un sello propio, como "Nuestras realidades", "Para gente grande" y "En vivo". Apenas el último domingo de enero, Rocha inició una nueva emisión en el canal dos, a las once de la noche, precisamente después de que concluye "Siempre en domingo", uno de los programas de mayor auditorio en la televisión comercial.

"Detrás de la noticia" del 18 de febrero ha pasado ya a la historia. Rocha consiguió el video completo y lo presentó igualmente íntegro, bajo el título "Toda la verdad sobre la matanza de Aguas Blancas". Fue una emisión ejemplar de lo que una televisión con responsabilidad informativa puede hacer. Rocha refirió algunos datos sobre violencia en Guerrero y sobre aquel suceso terrible del 28 de junio. De seguro el programa se habría enriquecido con antecedentes sobre el grupo campesino masacrado y sobre los otros muchos asesinatos políticos que han ensombrecido a Guerrero en los años recientes. Pero las limitaciones del tiempo hacían preferible ofrecer, en los treinta minutos de la emisión, los 16 que dura el documento donde se muestra cómo no hay enfrentamiento sino ataque policiaco agresivo sobre campesinos inermes. Con muy clara conciencia de lo que estaba haciendo, Rocha dijo al terminar la exhibición del video, que pensaba lo mismo que los espectadores, adivinando la reacción indignada de su auditorio. Y a continuación formuló las preguntas pertinentes, sobre las verdaderas causas y protagonistas de la violencia en aquella entidad.

Uno puede sospechar de las razones por las cuales Televisa otorga un espacio a un periodista como Ricardo Rocha. Cualesquiera que sean esos móviles, hay también un resultado, ese sí muy claro, de gran utilidad para el desarrollo político del país. No es fruto de la improvisación ni del espontaneísmo. Ricardo Rocha, respetuoso de los cánones de la empresa en que se ha formado, ha puesto en práctica en el sistema Radiópolis, que también dirige y es también propiedad de Televisa, sus convicciones y su talento profesional. En hora buena.